

JUZGADO NOVENO DE FAMILIA

Bogotá D. C., 13 de septiembre de dos mil veintiuno (2021)

Medida de Protección No. 419-2020

Radicado 2020-0408

Las diligencias de la referencia fueron remitidas por la Comisaría Primera de Familia Usaquéen I de esta ciudad, a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 12 del decreto 652 de 2001 que remite al Decreto 2591 de 1991 a efectos de surtir el grado jurisdiccional de consulta en cuanto a la multa impuesta.

De igual manera, se entrará a desatar el recurso de apelación respecto de la inconformidad con las medidas de protección complementarias, previo las siguientes,

ANTECEDENTES

La señora CLAUDIA PATRICIA FERNÁNDEZ CAMACHO acudió a la Comisaría Primera de Familia Usaquéen I de esta ciudad, poniendo en conocimiento los hechos de maltrato psicológico del que es víctima parte del señor RAFAEL EDUARDO ARCINIEGAS VANEGAS.

Instruidas las diligencias, mediante providencia de fecha 15 de septiembre de 2020, la Comisaria de conocimiento ordenó medida de protección a favor de CLAUDIA PATRICIA FERNÁNDEZ CAMACHO contra RAFAEL EDUARDO ARCINIEGAS VANEGAS, decisión contra la cual el accionado interpuso recurso de apelación que fuera desatado por este estrado judicial mediante providencia del 20 de noviembre e 2020.

Posteriormente con fecha 17 de febrero de 2021 la Comisaria de conocimiento admite el primer incumplimiento a favor de CLAUDIA PATRICIA FERNÁNDEZ CAMACHO contra RAFAEL EDUARDO ARCINIEGAS VANEGAS y mediante providencia de fecha siete (7) de julio de dos mil veintiuno (2021), le fue impuesta como sanción multa de cuatro (4) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

En dicha providencia igualmente la comisaria a quo, dispuso imponer una medida de protección complementaria consistente en el DESALOJO del señor RAFAEL EDUARDO ARCINIEGAS VANEGAS del CONJUNTO FLORESTA DE LA SABANA.

Frente a dicha medida complementaria el accionante interpuso recurso de apelación manifestando que la comisaria a quo como Directora del proceso debe requerir tanto al demandante como al demandado con la finalidad de escuchar a ambas partes cuales de los hechos enunciados son aceptados por las partes y cuáles no, definiendo los hechos que serán objeto de prueba.

Adujo que al analizar el caso se puede observar que la queja por el presunto incumplimiento fue iniciada de oficio por la comisaria contra el querellado al realizar una visita domiciliaria al lugar de los hechos donde la querellante manifestó que el denunciado no había dado cumplimiento a la medida de protección por no haber cumplido totalmente con la orden de desalojo y es en donde se deben centrar los argumentos y los medios de prueba, lo cual no fue atendido por la comisaria a quo, sino que se enfocó en el incumplimiento de la orden de abstenerse de realizar cualquier tipo de agresión, evidenciándose que la comisaria se sale del objeto de la investigación, así momento de evaluar conductas de violencia psicológica por parte del incidentado contra la accionante por el hecho de que el accionado se ha paseado cerca de la vivienda de la querellante con algunos amigos está ocasionando maltrato psicológico.

Afirma que durante la valoración probatoria realizada por la comisaria, desaprobó una de las pruebas que se aportaron al proceso que no era claro el lugar de residencia y que por ello no puede tomar como pruebas una foto satelital que aportó en la que señala que la distancia que existe entre la casas de la señora ÁNGELA MURILLO la de la señora CAROLINA ORTIZ y de la señora CLAUDIA FERNÁNDEZ, afirmación incompatible y sobre la cual la comisaria determine que existe un incumplimiento de la orden de desalojo de la casa Monte Positivo, sin tener certeza del lugar de residencia de la parte incidentada o por el hecho de que el accionado siguió vivió en el conjunto pero en otra casa, por invitación de unos amigos, además que allí realiza trabajos.

De igual manera señala que resulta incomprensible que realice una visita domiciliaria de oficio para el día 11 de febrero de 2021 y de oficio inicie un incidente de incumplimiento el día 17 del mismo mes y año, asaltando la confianza de la parte incidentada, pues no conocía de dicha prueba, sin dejar a un lado que endicha visita no se determinaron actos de violencia psicológica.

En relación con la visita del 7 de mayo de 2021 realizada por la comisaria de familia, se hizo para evidenciar la distancia existente entre el lugar de residencia de la accionante y del accionado, pero no para determinar hechos de violencia psicológica. De la misma manera se evidencia con el seguimiento realizado el 17 de diciembre de 2020.

Adujo igualmente que hubo una indebida valoración de los testimonios presentados por el incidentado que fueron desechados a diferencia de los testimonios presentados por la accionante.

Señaló que existe una contradicción entre lo señalado por la comisaria el día 4 de mayo de 2021 al señalar que no estaban probado el incumplimiento a la medida de protección y en la audiencia del 7 de julio sancionó al querellado, con lo cual se trata de una indebida valoración de las pruebas.

Afirma que los archivos de multimedia que aportó la parte incidentada al pretender abrirlos indican valor no válido para registro, la comisaria debió requerir al querellado para que los aportara en otro formato, pero no lo hizo.

Concedida la apelación, corresponde a este estrado judicial decidir lo pertinente.

CONSIDERACIONES

El artículo 4º de la ley 2941.996, modificado por el artículo 1º de la ley 575 de 2.000, consagra: *“Toda persona que dentro de su contexto familiar sea víctima de daño físico o psíquico, amenaza, agravio, ofensa o cualquier otra forma de agresión por parte de otro miembro del grupo familiar, podrá pedir sin perjuicio de las denuncias penales a que hubiere lugar, al Comisario de Familia del lugar donde ocurrieren los hechos y a falta de este, al Juez Civil Municipal o Promiscuo Municipal, una medida de protección inmediata que ponga fin a la violencia, maltrato o agresión o evite que esta se realice cuando fuere inminente...”*.

El artículo 18 *Ibíd*em prevé que contra la decisión definitiva sobre una medida de protección que tomen los Comisarios de Familia o los Jueces Civiles Municipales o Promiscuos Municipales, procederá en el efecto devolutivo, el recurso de apelación ante el Juez de Familia o Promiscuo de Familia.

El artículo 5º de la misma disposición contempla las medidas de protección y preceptúa: *“El funcionario podrá imponer, además, según el caso, las siguientes medidas: a) Ordenar al agresor el desalojo de la casa de habitación que comparte con la víctima, siempre que se hubiere probado que su presencia constituye una amenaza para la vida, la integridad física o la salud de cualquiera de los miembros de la familia; b) Ordenar al agresor abstenerse de penetrar en cualquier lugar donde se encuentre la víctima, cuando a discreción del funcionario dicha limitación resulte necesaria para prevenir que aquel moleste, intimide, amenace o de cualquier otra forma interfiera con la*

víctima o con los menores, cuya custodia provisional le haya sido adjudicada; c) Prohibir al agresor esconder o trasladar de la residencia a los niños y personas discapacitadas en situación de indefensión miembros del grupo familiar, sin perjuicio de las acciones penales a que hubiere lugar; d) Obligación de acudir a un tratamiento reeducativo y terapéutico en una institución pública o privada que ofrezca tales servicios, a costa del agresor cuando éste ya tuviera antecedentes en materia de violencia intrafamiliar; e) Si fuere necesario, se ordenará al agresor el pago de los gastos médicos, psicológicos y psíquicos que requiera la víctima; f) Cuando la violencia o maltrato revista gravedad y se tema su repetición el Comisario ordenará una protección temporal especial de la víctima por parte de las autoridades de policía, tanto en su domicilio como en su lugar de trabajo, si lo tuviere; g) Cualquier otra medida necesaria para el cumplimiento de los propósitos de la presente ley.”.

Para resolver el tema se debe tener en cuenta que los actos de violencia se presentan en dos formas, el primero de ellos mediante el maltrato físico, cuando se ocasionan lesiones en el cuerpo, por medio de: *“golpes, quemaduras, estrangulamiento, entre otros; produciendo fracturas, lesiones temporales o definitivas, llegando en algunos casos hasta la muerte”*, y, el segundo se manifiesta a razón del maltrato psicológico con *“actitudes de desprecio, control, burla, vigilancia de los actos del otro y la toma de decisiones importantes sin consultar a la familia”*¹¹; los cuales, entendida su acepción más amplia, incluye todo género de acciones que afectan la dignidad humana de la víctima en todas y cada una de sus concreciones: respeto a la vida, integridad física y moral, libertad de locomoción y armonía síquica y emocional.

Igualmente, el maltrato comprende mucho más que el simple ejercicio de la violencia, aunque este aspecto será el más socorrido que el simple ejercicio en el orden efectual–probatorio, alcanzando toda una gama de comportamientos que denigran, desedifican, menosprecian, humillan, coartan o, sencillamente neutralizan el adecuado y libre desarrollo de la personalidad de la víctima, en el ámbito intrafamiliar.

Descendiendo al caso tenemos que la denunciante sostiene que el señor RAFAEL EDUARDO ARCINIEGAS VANEGAS ha incumplido con la medida de protección que le fue impuesta, pues a pesar de haber sido desalojado del lugar de residencia que tenía con la accionante, siguió viviendo en el mismo conjunto donde reside, lo cual le causa angustia y pánico.

Para probar el accionante el nexo causal entre dichos maltratos y la persona que las ocasionó, se recibió su declaración, la del querellado quien negó totalmente los maltratos de que se le acusa y los testimonios.

En la querella y ratificación de la misma la señora CLAUDIA PATRICIA FERNÁNDEZ CAMACHO manifestó que el accionado sigue viviendo en el conjunto residencial donde había ya que después del desalojo sigue viviendo en una casa cercana donde todos los días se pasea bien sea con la novia, amigos por lo cual esta con miedo, lo cual le resulta bastante estresante para su recuperación. Afirmó igualmente que habla mal de su familia con su hija.

En declaración del señor RAFAEL EDUARDO ARCINIEGAS VANEGAS niega totalmente los hechos, aceptando que en su libre locomoción transita por los predios de la RESERVA DE LA SABANA pero que no es todos los días y que ha pasado por la casa de la incidentante.

Adujo que en relación con la valoración psicología que le fuera practicada a la accionante, la profesional que la hizo es una amiga de la familia por lo cual le surgen dudas en la realización de dicha valoración por ser cercana a CLAUDIA PATRICIA FERNÁNDEZ CAMACHO lo cual no es ético. Sostiene que no se llevado al perro, si no que el mismo pasea por el conjunto y lo busca.

Indico que el testimonio del señor JUAN RINCON no corresponde a lo que es objeto de investigación si no de unos hechos acontecidos en los años

2019 y 2020, sin dejar a un lado que existe una subordinación del testigo con la incidentante.

Con relación a la manifestación de manipulación de su hija, no hay pruebas de ello y que nunca le ha manifestado a su hija que quiere matar a CLAUDIA PATRICIA FERNÁNDEZ CAMACHO.

Obra en el expediente HISTORIA CLÍNICA de fecha 17 de febrero de 2021 donde se concluye que la paciente presenta sintomatología ansiosa relacionada con estrés grave por continuar el peligro al estar el ex esposo cerca, situación que no favorece la recuperación de la paciente del cáncer en tratamiento.

Por su parte el incidentado aportó pruebas satelitales del conjunto donde se muestran las residencias de las partes.

Chat entre la accionante y el accionado.

Contratos de adecuación de obras suscrito por los señores RAFAEL EDUARDO ARCINIEGAS VANEGAS y los señores MAURICIO REY, PETER RAUTE sin fechas de terminación.

Testimonio de la señora ÁNGELA MURILLO quien manifestó ser la actual pareja del señor RAFAEL EDUARDO ARCINIEGAS VANEGAS. Indicó que ha acompañado a su pareja en caminatas por el conjunto, pero que no transitan por los predios de la accionante, ya que sus casas están distanciadas.

Dictamen de profesionales en psicología que controvierten la valoración psicológica presentada por la accionante, pero dichos audios que lo contiene no fue posible abrirlos.

Audios de un amigo del accionado señor ALEJANDRO URIBE, los cuales no fue posible abrirlos.

Audios de Whatsapp que igualmente no abrieron.

Videos del día del desalojo.

Fotos de vivienda padre RAFAEL UBATE.

Foto de un correo sin fecha de remisión a la administración donde se lee “Apreciados señores: Por medio de la presente informo a ustedes que el Sr Rafael Antonio Arciniega CC 80504159 es arrendatario de un aparta estudio en Azul 1 desde el 15 de enero de 2010.

USB que contiene audios Psicología los cuales no se pudieron abrir.

En carpeta del 7 de agosto se observa la foto de un policía, otra de la incidentante hablando con dos policías, Imágenes de Google donde se indican las distancias de Ángela, Rafael y Claudia.

Carpeta del 18 de agosto se observan las mismas fotos de la carpeta del 7 de agosto, tres carpetas más con las mismas fotos.

Dos fotos con ubicación de una obra y otras de la distancia de las casas.

Video Ángela parte 1 no abre.

Igualmente obran las siguientes pruebas de oficio:

Visita domiciliaria de fecha 7 de mayo de 2021 donde se concluyó: *“Que al transitar constante y esporádicamente el incidentado en algunas ocasiones en compañía de su actual novia (ÁNGELA MURILLO) puede estar incumplimiento parcialmente con las medidas dadas por el Despacho ya que*

según lo verificado y manifestado por la incidentante actualmente se encuentra en estado de intranquilidad, angustia, estrés, zozobra, miedo, inseguridad, indefensión, generando con ello una violencia psicológica y presunta situación de riesgo...

...por lo encontrado en la visita y lo que reposa en el expediente la suscrita en calidad de trabajadora social encuentra que en aras de garantizar la salud mental, psicológica y emocional, la recuperación del cáncer que padece la incidentante es necesario que el incidentado no continúe viviendo en el mismo conjunto donde reside su ex esposa, ya que su presencia le ha ocasionado según diagnostico psiquiátrico estrés, ansiedad y no se puede olvidar que la incidentante ha manifestado que en varias ocasiones su ex esposo y padre de su hija ZUANA la querido ver muerta para quedarse con sus bienes.”

Testimonio del señor JOSÉ WILLIAM PEDROZA FUNEME señaló que tiene una amistad con las partes, laborando en la propiedad de la señora CLAUDIA PATRICIA FERNÁNDEZ CAMACHO. indicó que ha visto al señor RAFAEL EDUARDO ARCINIEGAS VANEGAS en cinco oportunidades cerca de la casa de la señora CLAUDIA, siendo la más reciente el día 7 de mayo de 2021, toda vez que se acerca a la casa silbando por lo cual el perro lo reconoce y corre tras él.

Finalmente señala que la distancia de cerca de 25 a 30 metros de la entrada de la vivienda al paso peatonal donde lo ha visto.

Testimonio de la señora MARÍA CAROLINA ORTIZ JARAMILLO manifestando que conoce a los intervinientes desde el año 2010 y nunca ha observado conductas que atenten contra la ley o de maltrato hacia otras personas, señala que desde que se ordenó la medida de protección no ha observado que el señor RAFAEL se haya acercado a la vivienda de la señora

CLAUDIA teniendo en cuenta que los senderos son privados por lo que resulta imposible que se acerque.

Adujo que el señor RAFAEL EDUARDO ARCINIEGAS habita en calidad de arrendatario en un aparta estudio de su propiedad. Indicó que no ha efectuado caminatas por el conjunto, pero que las rutas establecidas en los senderos no permiten el acceso a la casa de la accionante.

Testimonio de la señora LUZ STELLA FACUNDO RINCÓN manifestando que conoce a los intervinientes hace como dos años, pero con el señor RAFAEL no tiene ninguna amistad. Que al realizar ejercicios al aire libre dentro del conjunto donde residen se ha encontrado al señor RAFAEL tres veces y en alguna oportunidad le comunicó a la señora CLAUDIA PATRICIA FERNÁNDEZ CAMACHO que el señor se encontraba a los alrededores de la casa en compañía de una mujer, señalando que el sendero por dónde camina no hace parte de la propiedad de la señora CLAUDIA, pero colinda con los límites de dicha propiedad.

Testimonio del señor JUAN DE JESUS RINCON refiriéndose a un evento donde el señor RAFAEL le ordenó cortar unos árboles aduciendo que él debía obedecer porque esa propiedad era de él, hechos relacionados antes de efectuarse el desalojo en la medida de protección.

Testimonio de la señora ANGELA MURILLO CASAS, en la que señaló que conoció al señor RAFAEL EDUARDO ARCINIEGAS VANEGAS, caminando por el sendero donde camina la mayoría de residentes y con el cual sostiene una relación de noviazgo. Adujo que ha vivido toda la vida en el Conjunto Residencial la Sabana y en las caminatas que realizan por los senderos del conjunto no han irrumpido en la propiedad de la señora CLAUDIA PATRICIA FERNÁNDEZ CAMACHO. Señala que la relación de los señores CLAUDIA PATRICIA FERNÁNDEZ CAMACHO y RAFAEL EDUARDO ARCINIEGAS VANEGAS es para tocar temas con la hija en común.

No existe en el expediente otros elementos probatorios.

Para desatar el presente recurso se ha de tener en cuenta que fueron objeto de inconformidad los siguientes: 1.- Como es que la comisaria a quo como directora del proceso debe requerir tanto al demandante como al demandado con la finalidad de escuchar a ambas partes cuales de los hechos enunciados son aceptados por las partes y cuáles no, definiendo los hechos que serán objeto de prueba. 2.- La queja por el presunto incumplimiento fue iniciada de oficio por la comisaria contra el querellado al realizar una visita domiciliaria al lugar de los hechos donde la querellante manifestó que el denunciado no había dado cumplimiento a la medida de protección por no haber cumplido totalmente con la orden de desalojo. 3.- Que durante la valoración probatoria realizada por la comisaria, desaprobó una de las pruebas que se aportaron al proceso que no era claro el lugar de residencia y que por ello no puede tomar como pruebas una foto satelital que aportó en la que señala que la distancia que existe entre las casas de la señora ÁNGELA MURILLO la de la señora CAROLINA ORTIZ y de la señora CLAUDIA FERNÁNDEZ. 4.- De igual manera señala que resulta incomprensible que realice una visita domiciliaria de oficio para el día 11 de febrero de 2021 y de oficio inicie un incidente de incumplimiento el día 17 del mismo mes y año, asaltando la confianza de la parte incidentada, pues no conocía de dicha prueba, sin dejar a un lado que endicha visita no se determinaron actos de violencia psicológica. 5.- En relación con la visita del 7 de mayo de 2021 realizada por la comisaria de familia, se hizo para evidenciar la distancia existente entre el lugar de residencia de la accionante y del accionado, pero no para determinar hechos de violencia psicológica. De la misma manera se evidencia con el seguimiento realizado el 17 de diciembre de 2020. 6.- Indebida valoración de los testimonios presentados por el incidentado que fueron desechados a diferencia de los testimonios presentados por la accionante. 7.- Contradicción entre lo señalado por la comisaria el día 4 de mayo de 2021 al señalar que no estaban probado el incumplimiento a la medida de protección y

en la audiencia del 7 de julio sancionó al querellado, con lo cual se trata de una indebida valoración de las pruebas. 8.- Afirma que los archivos de multimedia que aportó la parte incidentada al pretender abrirlos indican valor no válido para registro, la comisaria debió requerir al querellado para que los aportara en otro formato, pero no lo hizo.

Debe decirse en primer lugar que la Ley 294 de 1996, por la cual se desarrolló el artículo 42 de la Constitución Política y se dictan normas para prevenir, remediar y sancionar la violencia intrafamiliar, están identificados los principios que toda autoridad pública debe seguir al momento de evaluar un caso de violencia intrafamiliar, de los cuales podemos destacar, *a)* la primacía de los derechos fundamentales y el reconocimiento de la familia como institución básica de la sociedad; *b)* que toda forma de violencia en la familia se considera destructiva de su armonía y unidad, y por lo tanto, será prevenida, corregida y sancionada por las autoridades públicas; y *c)* **la igualdad de derechos y oportunidades del hombre y la mujer**; entre otros.

Asimismo, dicha normativa estableció varias medidas de protección, el procedimiento a seguir cuando ocurren actos de violencia y las formas de asistencia a víctimas del maltrato intrafamiliar, como son las mujeres.

La actora inició una acción de protección por violencia intrafamiliar en contra de su esposo y padre de su hija, por los actos de violencia psicológica cometidos en su contra.

La violencia doméstica o intrafamiliar y psicológica va de la mano con la perspectiva de género, así como la naturaleza y alcance del interés superior de las mujeres y los niños.

La Ley 1098/2006 expresa que “*se entiende por **perspectiva de género** el reconocimiento de las diferencias sociales, biológicas y psicológicas en las*

relaciones entre las personas según el sexo, la edad, la etnia y el rol que desempeñan en la familia y en el grupo social.

Así las cosas, la perspectiva de género consiste en la necesidad de reconocer, cuando ello sea relevante, la asimetría que puede existir entre un hombre y una mujer, debido a una relación de poder. Ello se traduce en la obligación del Estado de diseñar e implementar políticas públicas que incluyan acciones afirmativas para superar la discriminación. Tal concepto encuentra apoyo en los artículos, 42, 43, entre otros, de la Carta Política y en los instrumentos internacionales.

En este estado de cosas, la administración de justicia tiene el deber de cumplir sus funciones a la luz de la perspectiva de género, en aquellos casos que se denuncie violencia sexual o intrafamiliar. A partir de lo anterior, existe entonces un deber constitucional bajo su cargo cuando se enfrenten con situaciones fácticas de estas características. Por esa razón, entonces, es obligatorio que incorporen criterios de género al solucionar sus casos. En consecuencia, cuando menos, deben analizar los hechos y las normas con base en interpretaciones sistemáticas de la realidad, de manera que se reconozca que un grupo tradicionalmente discriminado por virtud de las relaciones de poder, afectan su dignidad y autonomía.

Teniendo en cuenta los anteriores derroteros, se observa que la argumentación desplegada en el asunto materia del presente pronunciamiento no se compadece con la realidad probatoria que registra el expediente, pues sin las pruebas suficientes no podría tenerse por acreditado los hechos expuestos por la denunciante; recuérdese que las pruebas deben ser estudiadas en sus elementos comunes, en sus conexiones directas o indirectas, ya que ninguna prueba deberá ser tomada en forma aislada ni exclusiva, sino en conjunto, por cuanto de su sola visión integral se pueden sacar conclusiones acerca de la verdad.

Al revisar el material probatorio adosado al expediente no puede establecerse con grado de certeza, que el accionado haya incumplido con la medida de protección que se concedió en favor de la accionante CLAUDIA PATRICIA FERNÁNDEZ CAMACHO, basados en el hecho probado de que este vive en el mismo conjunto residencial donde habita la incidentante, ya que los medios probatorios recaudados durante el trámite del proceso y que han sido referenciados en precedencia, no dan cuenta con plena convicción de dicho incumplimiento, pues es claro que al interior del proceso con los testimonios recibidos lo único que se pudo probar es que el señor RAFAEL EDUARDO ARCINIEGAS VANEGAS, vive el conjunto residencial Floresta de la Sabana en una vivienda alejada de la residencia de la querellante, sin que se haya probado agresiones de carácter psicológico, físico o verbal en contra de la señora CLAUDIA PATRICIA FERNÁNDEZ CAMACHO, pues al ser analizadas las pruebas dentro del contexto, no pueden tomarse de forma aislada, como hechos de violencia psicológica por su condición de mujer, pues no determinan el alcance que quiere darse y que tengan esa relación con los hechos que se le imputan al denunciado, pues no existen elementos probatorios con grado de certeza, que permitan establecer dicha conexión.

Ahora, la valoración psiquiatría aportada al expediente que, si bien dan cuenta de la situación de ansiedad y estrés, al sentirse la señora CLAUDIA PATRICIA FERNÁNDEZ en una situación de maltrato y peligro por estar el ex esposo cerca, sin desconocer el despacho tal valoración, más cuando proviene de un profesional de la salud, pero al tomar las pruebas de manera individual y en su conjunto, no se puede evidenciar que entre las partes existan conflictos y más concretamente por el hecho de residir el accionado en el mismo conjunto, pero en otra residencia, pues es preciso recordar que la medida de protección que en su oportunidad se impuso radicó en el hecho de la convivencia, y por ello en su oportunidad se ordenó al querellado el desalojo de la vivienda familiar, orden que fue debidamente cumplida por el señor RAFAEL EDUARDO ARCINIEGAS VANEGAS.

Debe recordarse que las principales manifestaciones de la violencia psicológica, según diversos autores al clasificarla en diferentes conductas habituales en situaciones de malos tratos así:

Abuso verbal: Rebajar, insultar, ridiculizar, humillar, utilizar juegos mentales e ironías para confundir, poner en tela de juicio la cordura de la víctima.

Abuso económico: Control abusivo de finanzas, recompensas o castigos monetarios, impedirle trabajar, aunque sea necesario para el sostén de la familia, haciéndole pedir dinero, solicitando justificación de los gastos, dándole un presupuesto límite, haciendo la compra para que ella no controle el presupuesto, etc.

Aislamiento: Control abusivo de la vida del otro, mediante vigilancia de sus actos y movimientos, escucha de sus conversaciones, impedimento de cultivar amistades, restringir las relaciones con familiares, etc.

Intimidación: Asustar con miradas, gestos o gritos. Arrojar objetos o destrozar la propiedad. Mostrar armas. Cambios bruscos y desconcertantes de ánimo. El agresor se irrita con facilidad por cosas nimias, manteniendo a la víctima en un estado de alerta constante.

Amenazas: De herir, matar, suicidarse, llevarse a los niños, hacer daño a los animales domésticos, amenazar con irse o echar al otro de casa.

Desprecio y abuso emocional: Tratar al otro como inferior, tomar las decisiones importantes sin consultarle, utilización de los hijos, prácticas de privilegios masculinos. Se la denigra intelectualmente, como madre, como mujer y como persona. Negación, minimización y culpabilización.

Teniendo en cuenta lo anterior, no se pudo evidenciar con el material probatorio adosado al expediente ninguna de estas conductas que hayan sido realizadas por el señor RAFAEL EDUARDO ARCINIEGAS VANEGAS contra CLAUDIA PATRICIA FERNÁNDEZ CAMACHO, pues el solo hecho de residir en el conjunto residencial donde igualmente reside la incidentante o por el hecho realizar caminatas por los senderos peatonales habilitados para el efecto, pueda ser considerado como violencia psicológica, más cuando de las pruebas recaudadas no se establecieron conductas que puedan constituir una afrenta contra la integridad física o psicología de la víctima.

La Corte Suprema de Justicia en su Sala de Casación Civil, en sentencia de 25 de mayo de 2010, señaló que: *“Al Juez no le basta la mera enunciación de las partes para sentenciar la controversia, porque ello sería tanto como permitirles sacar beneficio del discurso persuasivo que presentan; por ende, la ley impone a cada extremo del litigio la tarea de traer al juicio de manera oportuna y conforme a las ritualidades del caso, los elementos probatorios destinados a verificar que los hechos alegados efectivamente sucedieron, o que son del modo como se presentaron, todo con miras a que se surta la consecuencia jurídica de las normas sustanciales que se invocan”*

Así las cosas, de conformidad con lo establecido en el artículo 167 del C. G. del P., en concordancia con la parte vigente del artículo 1757 del C.C., incumbe a las partes probar los supuestos de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico por ellas pretendido. De tal manera que para el presente asunto la carga de establecer los hechos que configuran los actos de violencia intrafamiliar, es de quien alega estos, para el caso, la querellante.

Con base en lo expuesto, el Juzgado concluye que debe revocar en todas sus partes la resolución de fecha 7 de julio del presente año, proferida por la Comisaría Primera de Familia Usaqué I de esta ciudad.

En mérito de lo expuesto, el Juzgado Noveno de Familia de Bogotá D.C., administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: REVOCAR la providencia del siete (7) de julio de dos mil veintiuno (2021) proferida por La Comisaria Primera de Familia Usaquéen I de esta ciudad.

SEGUNDO: Notifíquese esta decisión a las partes por el medio más expedito.

TERCERO: Devuélvanse las diligencias a la oficina de origen previa anotación de los libros radicadores.

NOTIFÍQUESE

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and strokes, identifying the judge.

CESAR ENRIQUE OSORIO ORTIZ
JUEZ

JUZGADO NOVENO DE FAMILIA, BOGOTÁ D.C.

NOTIFICACIÓN POR ESTADO

SECRETARÍA

Bogotá D.C., ---14 de septiembre de 2021

El auto anterior queda notificado a las partes por anotación en el ESTADO N° 130

MARIA ELSY RIVERA USECHE

Secretario

^[1] www.esecarisma.gov.co/paginas/principal/violencia_intrafamiliar.html